

PEDRO EUGENIO ARAMBURU

Las esperanzas alentadas por quienes no lograban convencerse de la realidad de un tenebroso crimen se han desvanecido. Sabemos ahora que el desenfreno criminal llegó, con frío ensañamiento, hasta las últimas consecuencias de su plan incalificable. El teniente general Pedro Eugenio Aramburu fue asesinado conforme a las noticias anónimas y sus restos quedaron sepultados con todas las precauciones previstas para que nunca fueran descubiertos. La conjuración era feroz, pero también quería ser hábil para rehuir responsabilidades. Se ha infligido así una afrenta sin ejemplo a la dignidad de la Nación, al concepto de pueblo civilizado con que se nos distingue en el mundo, y ello no ha ocurrido en una etapa de contiendas sangrientas, como fueron las de las otras “montoneras”, sino en días en que la enorme mayoría de los argentinos, a despecho de sus divisiones políticas, sólo aspira a encontrar solución a sus problemas por medios pacíficos. La mancha de la tragedia a que asistimos no hubo de ser imaginada por ningún ser normal.

Pocos hombres de nuestro medio político podían considerarse más alejados de las pasiones susceptibles de engendrar el odio, no obstante haber desempeñado un gobierno revolucionario que debió afrontar graves problemas y remover los escombros materiales y morales amontonados por una dictadura de violencia implacable. El general Aramburu aceptó esa tarea porque se la impusieron las circunstancias, en momentos en que toda la obra de indispensable reconstrucción había sido puesta en peligro por influencias ocultas que acechaban la posibilidad de desviar su rumbo. El nuevo gobernante no había militado en ninguna bandería, no había inferido ni recibido ofensas, no tenía, en el fondo, disposiciones para la acción política. Estos mismos rasgos fueron, acaso, los que lo destinaron a esa elección de sus camaradas de armas, ansiosos de mantener los fines revolucionarios y sancionar a los causantes de nuestra degradación cívica, pero dispuestos a moverse en una esfera limitada por la conveniencia de aplicar la justicia del programa de septiembre de 1955 sin incurrir en excesos que lo desnaturalizaran.

El presidente Aramburu inició el cumplimiento de sus funciones, que él no había reclamado, con la serenidad de quien creía en el mérito de su causa, aclamada en todo el país por imponentes muchedumbres y aprobada por sus personalidades más espectables.

En ese empeño lo acompañaron las otras figuras militares de la Revolución Libertadora. Había que esclarecer actos inicuos de corrupción y de despotismo; había que ilustrar a la opinión popular sobre un proceso cuyo trasfondo no podía conocer ella exactamente, no obstante haber sufrido en carne propia sus efectos. La falsa y ensordecedora propaganda dictatorial tuvo la virtud de confundir a los espíritus simples, que conocían las limosnas “justicialistas”, pero ignoraban la acción poderosa de una economía de despojos y de un desquiciamiento institucional a cuyo término no quedaría en pie más que el aparato forjado para eliminar todo obstáculo opuesto a una tiranía vitalicia.

Frente a ese cuadro, iluminado todavía por el resplandor de los incendios de iglesias y bibliotecas, un gobierno de otra entraña habría podido dejarse dominar, como ha acontecido en naciones americanas, por móviles de represalia o de castigo que fueran más allá de las exigencias de reparación estricta. No ocurrió tal cosa, y en dos años de gobierno no pudo destacarse más acto de rigor que la inevitable represión, ajustada a la ley militar, de un motín que sorprendió cierta noche al país con proclamas de exterminio y anuncios de que la tiranía sería restaurada. La ejecución de ese deber penoso, sin la cual habríamos podido volver a etapas mucho más sombrías que las precedentes, es lo que se ha invocado ahora para consumir, en lúgubres escondrijos, el asesinato de quien supo servir y amparar a su pueblo con tanta serenidad como firmeza.

No obstante haber llegado al poder en nombre de una decisión militar que no encontró vallas ni resistencias, porque sólo unos cuantos pretendieron ensayar tímidamente la defensa del despotismo en fuga, el gobierno encabezado por el general Aramburu y el almirante Rojas se distinguió por su afán de amoldarse a las subsistentes formas institucionales y de mantener con la ciudadanía una convivencia franca. Respetó los partidos políticos y reorganizó la justicia moderadamente, dando a la Nación una Corte Suprema que la honra por su saber y su decoro; buscó, desde el primer momento, la colaboración de los civiles, sin preferencias dictadas por razones ajenas a lo que juzgaba el buen servicio; se propuso y realizó, como finalidad primordial, el restablecimiento de la Constitución de 1853-60, que había sido mutilada y deformada por una decisión parlamentaria sin validez, ya que careció de la mayoría prescrita en su propio texto; respetó la plenitud de los derechos y garantías constitucionales, que resumen la esencia de la vida republicana, y presidió por último, como lo había prometido, comicios generales que se distinguieron por su limpieza excepcional, sólo comparable a la de la era de Sáenz Peña. Proclamó entonces la victoria del candidato con más votos, apenas conocidas las cifras completas del escrutinio, enviando para su custodia elementos de seguridad que garantizaran su investidura. Olvidaba, en bien de la paz pública inmediata, los peligrosos compromisos electorales que habían afectado en su origen a la candidatura mayoritaria. No se podrá decir que, en circunstancias análogas, se haya dado en país alguno de América un caso tan elocuente de lealtad cívica. Este espíritu se había hecho visible en todo el curso del gobierno, que fue también de regularidad administrativa, de restauración económica, de paz internacional, de iniciativas sociales proporcionadas a las posibilidades del momento. Durante ese transcurso nadie sintió el temor de sanciones inmerecidas, ni aun los más descontentos, porque circulaban periódicos de todas las tendencias y habría sido imposible ocultar hechos arbitrarios. La población argentina, sin excluir sus áreas de sorda oposición, sentía esa seguridad, y la opinión extranjera la sintió también inmediatamente y otorgó al gobierno una confianza comparable a la que habían merecido los mejores gobiernos legales del pasado reciente. Para lograrlo, además de los hechos de la gestión revolucionaria en su conjunto, tenía un singular poder de atracción la sobria y afable figura del general Aramburu, la llaneza de su trato, su espíritu abierto a todas las nobles sugerencias, su transparente buena fe, la modestia de su carácter, su visible afán de servir sin reclamar honores.

Así lo vieron también los presidentes americanos que se reunieron con él en Panamá y le hicieron el honor de elegirlo para que hablara en nombre de ellos al inaugurarse su conferencia. El eco de esa simpatía internacional quedó demostrado cuando abandonó el poder a su sucesor y ha perdurado hasta hoy, como lo probaron los homenajes subsiguientes de las naciones que visitó y lo prueban los comentarios sobre su inicuo secuestro.

Un hombre así, capaz de sobreponerse a vicisitudes tan diversas, merecedor de fe dentro y fuera de su tierra, es para cualquier nación una entidad humana digna de ser preservada como un bien colectivo. Pero la furia sectaria no respeta esa clase de títulos; por el contrario, los detesta como vedados privilegios. Es fácil ponerla en acción por medio de prédicas enconadas y hacerla estallar hasta en los momentos menos explicables, porque ella obedece a motivos artificiosos e irracionales, a la abundancia de medios puestos de pronto en las peores manos, a la oculta inquina de una minoría de resentidos. Esa insospechada furia ha ido a buscarlo en su virtuoso hogar, abierto a las solicitudes de la amistad, despojado de toda riqueza, y lo ha secuestrado valiéndose de amenazas contra la vida de sus seres queridos, para llevarlo de escondite en escondite hasta el día del asesinato y conducirlo luego a un pueblo remoto y esconder sigilosamente su cadáver. El general Aramburu tenía fe, sin duda, en la nobleza de su pueblo, del que sabía que ninguna profunda hostilidad lo separaba. Lo mejor de ese pueblo habría sabido defenderlo, pero ignoró la amenaza. No pudieron ignorarla, en cambio, las autoridades que lo habían dejado sin ninguna protección. Este reproche está en todos los labios y origina todo género de conjeturas, como es propio de los celos colectivos. Las verdaderas causas de su sacrificio se hallan a punto de revelarse o lo serán mañana, indefectiblemente, porque el teniente general Aramburu se ha incorporado ya a la historia de la Nación. Espectros de “montoneros”, tan alabados oficialmente en los últimos años, y sombras de inmotivados vengadores recientes se mezclan en el cuadro trágico. Vienen de lejos y de cerca las explicaciones verosímiles. Nada de ello ha de disminuir, sino, por lo contrario, enaltecer su clara memoria. Por sobre todas las miserias del presente quedará perpetuada su figura de militar ciudadano, de gobernante honrado, de hombre sencillamente confiado en la bondad y en la gratitud de los otros hombres. Cuando se hayan olvidado para siempre siluetas anecdóticas de nuestros días, él continuará viviendo aureolado por la más dolorosa pero también la más duradera de las glorias: la que acompaña, como una acusación, a la memoria de los mártires de su deber, sacrificados por el odio selvático, baldón de los pueblos adormecidos.